

Los desafíos de la economía latinoamericana en los últimos años y algunas de sus repercusiones políticas y sociales

ANDRÉS COLLADO

Embajador y director de la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España

RESUMEN

El desequilibrado modelo económico adoptado en los años ochenta por los países latinoamericanos basado en una estricta estabilidad macroeconómica y en la introducción de una corriente liberalizadora del sistema económico y de los servicios públicos, supuso un descenso de la inflación, el fortalecimiento de los sistemas financieros y una mejora del sistema fiscal. Pero estas primeras medidas reformistas impactaron sobre Estados frágiles por lo que gradualmente fueron agotándose y terminaron por generar estancamiento económico y desempleo. Se entró así en una nueva fase caracterizada por una insuficiente alza de los PIB's, el desempleo, y el mantenimiento de altos niveles de pobreza y de desigualdad.

La insatisfacción social que generaron aquellas medidas ha tenido también repercusiones políticas, las cuales se arrastran desde entonces en varios países, y cuyas manifestaciones más visibles han sido la aparición del «golpe de estado constitucional», una desilusión por el sistema y los valores democráticos, y el surgimiento de «utopías arcaicas» en el seno de las confederaciones indígenas que han tenido especial eco en los países andinos.

Palabras clave: Pobreza, consenso de Washington, golpe de estado constitucional, desilusión, mesianismo indígena.

América Latina constituye un subcontinente apasionante, que se encuentra en un periodo de consolidación en distintos órdenes y en el que se suceden acontecimientos políticos y culturales que a menudo tardan en ser percibidos en su integridad desde Europa o, incluso, desde España a pesar de los antiguos y profundos vínculos

que los europeos y, especialmente, los españoles compartimos con las naciones iberoamericanas.

Desde el punto de vista poblacional, el continente latinoamericano presenta notables características de dinamicidad y juventud, constituyendo el 8,54% de la población mundial que se asienta sobre el 15,2% de la superficie global. Después del africano, posee el porcentaje de población joven más alto del mundo (el 29,5% tiene menos de 15 años, y sólo el 5,9% más de 65 años), su índice de natalidad es similar al de Asia (2,69), pero cuenta con una mayor esperanza de vida (69,3 años).

Desde una perspectiva de riqueza económica, Latinoamérica posee cerca del 6,8% del PIB mundial (1.973.172 m. de dólares) y el 27,2% de la deuda total (398.042 m. de dólares), siendo hace tres años su renta per cápita/media de alrededor de 3.850 dólares. Sobre esas bases, 128 millones de personas de la región (24,5%) viven en condiciones de pobreza, de los cuales 50 millones (el 9,5%) lo hacen en situación extrema (es decir, con menos de 1 dólar al día). En contraste, su subsuelo y aguas interiores y exteriores albergan importantes recursos y materias primas, representando por ejemplo la tercera región del mundo en reservas de petróleo y gas.

Los años 80 del pasado siglo XX se caracterizaron por la convergencia de dos grandes procesos en América Latina. El primero «de características políticas y claramente democratizadoras», se inició en el Ecuador en 1978, y fue gradualmente expandiéndose hasta terminar con la inmensa mayoría de los gobiernos autoritarios de corte civil o militar, incluyendo, desde mediados de los 80, a la misma región centroamericana (Nicaragua, El Salvador y Guatemala). El segundo de los procesos, «de instauración de reformas económicas» de envergadura, se puso en marcha al concluir la crisis financiera de México (conocida como el «tequilazo» de 1982) y se caracterizó por la implementación de políticas inspiradas en el denominado «consenso de Washington» que incluían un paquete de medidas basadas en la estabilidad macroeconómica, y en el impulso de una amplia corriente liberalizadora del sistema económico y de los servicios públicos que en poco tiempo generaron un sustancial descenso de la inflación, el fortalecimiento de los sistemas financieros nacionales, una cierta mejora del sistema fiscal y, en definitiva, el inicio de un

lento cambio del modelo de desarrollo que se había implantado en el subcontinente en los años 1930-1945.

Pero estas primeras reformas impactaron sobre Estados frágiles y sociedades que, en bastantes casos, seguían ancladas en planteamientos y comportamientos del modelo económico anterior, por lo que gradualmente fueron agotándose y terminaron por frenar las capacidades de crecimiento, de generación de inversión y de creación de empleo. Muchos países entraron así en nueva fase caracterizada por alzas del PIB claramente insuficientes, una congelación de los salarios, el mantenimiento de altos niveles de pobreza y de desigualdad social y por el surgimiento de una sostenida corriente emigratoria hacia los Estados Unidos y, por vez primera, hacia Europa.

Los índices globales de pobreza y desigualdad, por ejemplo, presentan cifras muy preocupantes. Y es que cerca de 128 millones de personas que viven en la región (el 24,5%) viven en condiciones de pobreza, es decir, con menos de 2 dólares diarios, y de ellos, 50 millones (el 9,5%) lo hacen en situación de extrema pobreza, con menos de un dólar al día. Un estudio del Banco Mundial aparecido en octubre de 2003 bajo el título de «la desigualdad en América Latina y el Caribe, ruptura con la historia», volvía a mostrar la gran disparidad que se registraba en el subcontinente en materia de ingresos, bienes y acceso a servicios básicos, educación y oportunidades entre las distintas capas de la población. Se estimaba además que el 10% más rico de la sociedad percibía el 48% de los ingresos totales del país, mientras que al 10% más pobre correspondía el 1,6% de los ingresos.

Ni siquiera el notable crecimiento que han vuelto a experimentar la mayoría de las economías latinoamericanas a partir de 2003, impulsado en buena medida por la demanda de materias primas de Asia, ha servido para corregir los problemas estructurales que aún presentan numerosas naciones en términos de infraestructuras, y de modelos fiscales, de generación de empleo, de protección social o de distribución de renta. Y conviene tener en cuenta que el crecimiento económico de América Latina en el año 2005 fue del 4,5% y una cifra similar se ha alcanzado en 2006, mientras que en el periodo 1950-1955 el alza media fue del 5,5% y del 6,2% en los años 1967 a 1974.

La suma de aquellos déficits puede explicar probablemente el rechazo que han provocado en los últimos años las reformas implantadas en un número notable de países cuyos ciudadanos esperan ahora la consecución de un nuevo consenso de medidas económicas que deberían aplicarse en la región, las cuales deberían contar con un amplio contenido social y de equidad. El mencionado Informe del Banco Mundial identificaba a finales de 2003 cuatro áreas principales para un futuro plan económico y social: un mejor acceso a determinados activos, especialmente los correspondientes a la educación, pero también a la tierra y a las infraestructuras públicas; una mayor participación en los mercados de factores (caso del crédito, y del laboral) y a la seguridad social; la puesta en marcha de regulaciones macroeconómicas y financieras prudentes para evitar nuevas crisis; y una mejor utilización de la capacidad redistributiva de los estados mediante impuestos y transferencias.

En todo caso, las sociedades iberoamericanas están haciendo frente estos años a una serie de profundas repercusiones políticas y culturales derivadas de las medidas económicas aplicadas en el contexto del consenso de Washington que, aunque sea someramente, es preciso mencionar.

Así, en primer término, diversos autores han evidenciado que los sistemas políticos binarios (civiles o militares) sobre los que se desarrolló la dinámica política en América Latina hasta principios de los años 90, fueron poco a poco reemplazados en ciertos países por una dinámica nueva, la del «golpe de estado constitucional», que recogió demandas sociales puntuales para legitimar su protesta contra el sistema, y del que fueron víctimas Presidentes como, por ejemplo, el brasileño Fernando Collor de Mello, el venezolano Carlos Andrés Pérez, o el peruano Alberto Fujimori, por no mencionar los casos ocurridos en el Ecuador nación que ha vivido traumáticamente el derrocamiento de sus tres últimos Jefes de Estado (Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez), los cuales habían sido elegidos democráticamente.

Se ha ido produciendo, en segundo lugar, una progresiva desilusión de amplias capas de la población en las instituciones democráticas, puesta claramente de manifiesto por el Informe Caputo en 2003 elaborado por mandato del Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo (PNUD), así como por posteriores «latinobarómetros». Según dichos documentos, los latinoamericanos prefieren la democracia como sistema político, pero desconfían de su capacidad para mejorar sus condiciones de vida. La mitad de la población (48,1%) antepone el desarrollo económico a la democracia, y un 44,9% apoyaría a un gobierno autoritario, si éste resolviera los problemas económicos que conoce su país. Además, aproximadamente el 36% de los latinoamericanos está de acuerdo en que el Presidente de la República debería dejar de lado a los partidos y al Parlamento a la hora de gobernar, si esto supusiera mejoras en empleo y seguridad. En definitiva, la mayor parte de la población estima que una democracia no puede existir sin partidos ni Parlamento, pero su funcionamiento en términos reales, genera una insatisfacción generalizada.

En 2002, los demócratas constituían, según el Informe Caputo la orientación política más extendida entre los latinoamericanos, pero éstos no eran mayoritarios: el 43% de la población se declaraba democrática en 18 países, frente a un 30,5% de indiferentes y un 26,5% de no-demócratas. Además, cada subregión presentaba rasgos distintivos:

- en Centroamérica y México los demócratas representaban el 50% del total, superando en más del doble a los no demócratas, y en un alto porcentaje a los indiferentes.
- en los países del MERCOSUR y Chile, existía una situación polarizada en la que la diferencia entre demócratas y no demócratas era estrecha.
- por su parte, en las naciones andinas existía un equilibrio entre las tres tendencias.

El ex-canciller Dante Caputo estimaba en su interesante dossier que existían dos desafíos principales hoy para los dirigentes democráticos en Latinoamérica: por un lado, encontrar soluciones políticas a los problemas políticos existentes, lo que implicaba la búsqueda de nuevas formas de canalizar la participación, el control y la gestión de agendas, así como la conclusión de acuerdos políticos en el marco de una situación caracterizada por una creciente «globalización de las influencias» y una «transnacionalización de los problemas». Por otro, alcanzar consensos sobre políticas que resolviesen

gradualmente los problemas de desigualdad, pobreza e imposibilidad de acceso a los niveles de bienestar necesarios para el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos. En el pasado la persistencia de estos problemas habían servido para justificar el seguimiento de caminos alternativos a la democracia, pero hoy eran tomados como grandes desafíos que la democracia debía de resolver.

En paralelo, se viene registrando un amplio apoyo a candidatos políticos de corte neo-populista tal y como muestran los resultados en primera o segunda vuelta de los numerosos procesos electorales que se han registrado en América Latina desde el último trimestre de 2005 hasta finales de 2006. Estos candidatos han abogado por la introducción de cambios radicales en el rumbo de la economía e, incluso, en la orientación de la política general.

En tercer lugar, autores como Mario Vargas Llosa se han referido con lucidez al surgimiento de otro fenómeno político de envergadura el de las «utopías arcaicas» en varias naciones iberoamericanas, las cuales reinventan el pasado ofreciendo mitos para oponerlos a la modernización y a la globalización. Se reproduce así del otro lado del Atlántico lo que ha sucedido también en el mundo árabe desde hace algunos años al reproducirse el viejo debate en que viven sus sociedades entre modernización e islamización.

Pero es en la región andina en donde se vive un amplio renacimiento de sociedades y de sentimientos de aquel tipo, que se traduce en el lanzamiento de reivindicaciones de tipo cultural, político y económico.

El «indigenismo romántico» antepone en ese sentido al grupo por encima del individuo, y frente a la propuesta liberal modernizadora, de corte criollo-occidental, escoge al individuo y a la defensa de sus derechos y libertades. El «mesianismo indígena», que se presenta como la auténtica alternativa al sistema democrático liberal, posee además otros rasgos comunes en al menos tres países andinos. Ha ocupado el vacío dejado por los partidos de izquierda en defensa activa de una distribución equitativa de la riqueza, en su oposición a la política de los Estados Unidos y en rechazo a la globalización (especialmente de sus manifestaciones locales, como el ALCA y la explotación de sus recursos naturales por multinacionales petroleras).

Y está imbuido, en tercer lugar, de un claro discurso nacionalista que recurre tanto a los mitos del pasado (como el Imperio inca Tahuantisuyo del siglo XV) como a la rivalidad histórica con algún país vecino.

El análisis global de estas y otras dimensiones de la realidad latinoamericana debería alentarnos, especialmente en España, a una reflexión profunda sobre las causas profundas del «malestar» que afecta a países de aquel subcontinente y al papel que está reservado a nuestro país y a nuestras empresas en su resolución.